



Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

RADICACIÓN: 11001-33-35-010-2020-00290-00
DEMANDANTE: SARA PAOLA RIVERA MORENO
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Estando el expediente al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda, es procedente decidir previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Del escrito de demanda se observa que lo pretendido por la parte actora es que se declare la nulidad del fallo de primera y segunda instancia proferidos por la Secretaría General – Control Interno Disciplinario y el Director General del Instituto Nacional para Ciegos – INCI el 22 y 29 de octubre de 2019, respectivamente, a través de los cuales se impuso una sanción disciplinaria de suspensión del cargo a la demandante por el término de seis (6) meses; siendo ejecutada por medio de la Resolución No. 20191110003034 del 30 de octubre de 2019 y notificada el mismo día tal como consta a folios 83 y 84 del expediente digital.

Así entonces, de conformidad con lo previsto **por numeral 2 literal d) del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según fuere el caso.

Por su parte, el inciso 7º del artículo 118 del Código General del Proceso, establece que cuando el término sea de meses o de años su vencimiento será el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año, e indica que si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

Teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados quedaron debidamente notificados el día 29 de octubre de 2019, se tiene que el término de caducidad comenzó a correr el día **30 de octubre de 2019** y vencía el día **2 de marzo de 2020**.

Igualmente, a la luz de lo establecido por el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 del mismo año, el término de caducidad se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y sus efectos cesarán una vez se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001 o hasta que venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero.

En sub lite, el Despacho encuentra que el demandante en aras de dar cumplimiento al requisito establecido por la referida Ley 1285 de 2009, según constancia de conciliación allegada al expediente, elevó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio público “Procuraduría 139 Judicial II Para Asuntos Administrativos”, el día 18 de noviembre de 2019, por lo que de conformidad con la norma antes señalada,



se produjo la suspensión del término de caducidad (4 meses), el cual venía transcurriendo desde el día 30 de octubre de 2019, faltando así tres (3) meses y catorce (14) días para su cumplimiento.

Ahora bien, la conciliación prejudicial fue declarada fallida el día 10 de febrero de 2020 (fls. 19 y 20), con lo cual a primera vista sería dable decir que desapareció con ello, la causa que originó la suspensión, rehabilitándose de esta manera el término de caducidad (4 meses) de que trata el artículo 164 C.P.A.C.A, circunstancia por la cual el interesado, estaba compelido para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa dentro del tiempo que le restaba, esto es tres (3) meses y catorce (14) días, es decir hasta el 26 de mayo de 2020.

No obstante lo anterior, se tiene que mediante Decreto 564 de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, se determinó la suspensión de los términos de prescripción y caducidad, indicando a su texto:

Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios control o presentar demandas la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal.”

Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 determinó el levantamiento de la suspensión de los términos judiciales a partir del 1º de julio de 2020.

Conforme lo anterior, se tiene que la suspensión de los términos de prescripción y caducidad suspendidos mediante Decreto 564 de 2020, finalizó con el levantamiento de los términos judiciales y por lo tanto a partir del 1º de julio de 2020, se reanudó el conteo de los términos que quedaron suspendidos.

En tal virtud, volviendo al caso que nos ocupa, al 10 de febrero de 2020 al aquí demandante le faltaban tres (3) meses y catorce (14) días; sin embargo, teniendo en cuenta que con ocasión de la pandemia fueron suspendidos los términos de prescripción y caducidad a partir del 16 de marzo de 2020; se tiene que entre las dos fechas en mención transcurrieron un (1) mes y cinco (5) días, faltando así dos (2) meses y diez (10) días para que se presentara la figura jurídica en cita, es decir, más de un mes.



Luego entonces, acorde con la normativa transcrita en párrafos anteriores, el actor contaba con dos (2) meses y diez (10) días contados a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente; esto es, hasta el 11 de septiembre de 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que, como ya fue señalado en párrafos anteriores, el levantamiento de los términos judiciales fue levantado oficialmente a partir del 1º de julio del 2020.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda en curso fue radicada el 26 de octubre de 2020, para el Juzgado es evidente que el ejercicio de dicha acción se hizo extemporáneamente, es decir, por fuera de los 4 meses dispuestos para ello, operando por ende la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, en consecuencia la demanda deberá ser rechazada de plano, por expresa disposición del inciso 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE:

PRIMERO: RECHAZAR de plano el MEDIO DE CONTROL de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, instaurado por **SARA PAOLA RIVERA MORENO** en contra del **INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI** por haber caducado la acción, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución de los anexos aportados por la parte actora sin necesidad de desglose y el archivo de las restantes actuaciones, previo los registros correspondientes.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a **WILSON SUÁREZ PEDRAZA** con cédula de ciudadanía No. **91.284.719** expedida en Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 152.630 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial de **SARA PAOLA RIVERA MORENO** en los términos y para los efectos del mandato obrante en el expediente.

CUARTO: Por la Secretaría descárguese el inventario del juzgado el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
JUEZ

Jofi

Firmado Por:

LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ



JUEZ
JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE
DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
44ef706d90333574146a6eac6bb771c03405c7ab3c6967613deaaa693911b7c9
Documento generado en 13/05/2021 10:22:27 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>